


**TOLVANERA  
ROBERTO  
ZAMARRIPA**

robertozamarripa2017@gmail.com


*El gasto social no puede ser pretexto. Lo que urgen son otras inversiones y reducción de déficit.*

# La cobija

**1.** La iniciativa presidencial para desaparecer siete organismos autónomos argumenta que al tener independencia de gestión, presupuesto propio “y atribuciones desgajadas de las dependencias básicas del Poder Ejecutivo”, generan una tendencia a “la pulverización de las facultades del Estado”.

Entre 2018 y 2024, dice la iniciativa, los siete organismos sumaron un presupuesto de más de 32 mil millones de pesos lo que, asegura el documento, equivale al pago de 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para bienestar de personas adultas mayores. Es decir, en esa lógica, son inútiles y caros.

El artículo tercero transitorio de la iniciativa a aprobarse esta semana subraya que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos” se destinarán al Fondo de Pensiones del Bienestar. Según cálculos, de la fracción parlamentaria morenista, los “ahorros” logrados con la desaparición de los autónomos serían de 100 mil millones de pesos.

México Evalúa no cifra en eso el supuesto “ahorro”, pues asegura que en 2024, el presupuesto de los 7 organismos en cuestión fue de 4 mil millones de pesos.

Los organismos autónomos, cada uno en su ámbito, fueron pervertidos por quienes los constituyeron e integraron (gobiernos y legisladores de todos los partidos, incluidos dirigentes entonces del PRD y que

ahora están en Morena) y por intromisiones de grupos y monopolios que veían afectados sus intereses.

¿Eso supone el retorno a la centralización u obligaría a la profundización de la autonomía de sus integrantes? Lo deseable es que prevaleciera la esencia de independencia y el fortalecimiento del contrapeso de estos organismos de vigilancia ciudadana que ayude a romper decisiones monopólicas y fomentar la competencia. Alertar sobre actos de corrupción, quebrar la discrecionalidad y la opacidad en la gestión pública.

2. La extinción de autónomos no es el punto de financiamiento de pensiones del bienestar. Es un aporte, pero no el sustento.

La perspectiva delineada rumbo al 2025 es de mayor gasto público y, no hay de otra, una reducción considerable del gasto operativo. El mensaje central tiene que ver con el camino para disminuir el déficit fiscal a un 3.5 por ciento, como prometió Sheinbaum, en medio de los nubarrones que se presentan a partir del retorno de Donald Trump.

El encuentro organizado por el Georgetown Americas Institute (GAI) sobre los desafíos económicos para México fue ilustrativo en cuanto a las opciones que tiene el nuevo gobierno para no entrar en caminos de recesión y estancamiento.

Alejandro Werner, director del GAI, lo sintetiza al referir que hay consenso en los avances en materia de distribución de ingreso

y disminución de pobreza en México, aunque con la advertencia del deterioro de los servicios públicos.

“Si este deterioro continúa, los avances en equidad y reducción de la pobreza no serán suficientes para fomentar la movilidad social”, puntualiza.

Y apunta: “debido a las presiones estructurales de gasto, especialmente en pensiones y salud, es imprescindible llevar a cabo una reforma tributaria”. (*Reforma* 10/11/2024).

3. Los fondos para grupos vulnerables (lo que llaman gasto social) son manejables en el presupuesto. Han puesto ya un piso. Lo dicen especialistas y lo reflejan las circunstancias. La mejora del ingreso con los incrementos salariales básicos y los fondos sociales alteraron la ecuación.

El tema ahora son los faltantes. Las necesidades de mejora de gasto educativo y de salud, y la puesta de mira en inversiones armónicas con el freno al deterioro climático, acumulan gastos obligados. El presupuesto 2025 no puede verse, ni por los defensores ni por los detractores, solo a partir del gasto en fondos de apoyo a grupos vulnerables.

El conjunto de necesidades abiertas a partir de un nuevo piso de beneficio social, obliga a otro tipo de reflexiones de política pública. Gastos de infraestructura y mejora de servicios públicos como imperativo, antes que convertir al presupuesto en propaganda.